

Aportes para seguir avanzando

Por Mariano Palamidessi (*) Conectar Igualdad: "una nueva e importante oportunidad".

Creo que una política pública que –con fuerte decisión y con recursos- se propone materializar el derecho de todos/as los jóvenes a acceder al mundo de las redes y de la información y comunicación electrónica debe ser vista como una nueva e importante oportunidad.

Hace más de veinte años que –de una u otra manera- el Estado nacional y los estados provinciales han tomado la cuestión como un objeto de política pública. No obstante, ni las condiciones macroeconómicas ni las capacidades estatales permitieron que la Argentina desarrollara una política sistemática, articulada y sustentable en materia de integración de las nuevas tecnología en el sistema educativo. Por muy diversos motivos, los sucesivos programas apenas alcanzaron a cubrir segmentos muy acotados del sistema para luego disolverse, sin generar un espacio permanente de planificación, implementación, evaluación y estudios sistemáticos de políticas en la materia.

Luego de tantear y descartar la iniciativa OLPC y de expandir el modelo 1 a 1 en el Ciclo Superior de las Escuelas Técnicas, “Conectar Igualdad” se presenta como un gran salto adelante en la materia. Se trata de una iniciativa pública de envergadura, orientada hacia el logro de objetivos de importancia estratégica para el desarrollo social y educativo del país.

Entendiendo que las políticas públicas son procesos sociales que pueden ser mejorados por la vía del debate y la investigación, quisiera plantear dos o tres cuestiones que, a mi juicio, deben ser pensadas para que el programa pueda alcanzar los resultados esperados:

1. En primer lugar, creo que será necesario replantear la cuestión del financiamiento del programa. Conectar Igualdad se financia con fondos de la seguridad social y no del Presupuesto Nacional. Es lícito y prudente preguntarse: a) si se trata de una fuente de financiamiento legítima y adecuada, b) si se trata de una fuente sustentable en el tiempo. Los gastos recurrentes para la reproducción, el mantenimiento y el desarrollo futuro del programa no deben ser menospreciados y, para eso, hay que evaluar las alternativas disponibles.
2. En segundo lugar está la cuestión del gobierno y del *rationale* que orienta efectivamente las decisiones fundamentales. Es a todas luces claro que –siendo un programa que puede llegar a modificar profundamente al sistema educativo- existe aún una débil articulación entre Conectar Igualdad y las políticas de reforma de la educación secundaria. En el corto plazo, se puede comprobar que las tareas de conexión y reparto de equipamiento están dejando en un lejano segundo plano cualquier otro tema de la agenda de la educación secundaria. Y que el “peso” político-institucional del Ministerio de Educación está lejos de equilibrar el de los organismos que disponen de los fondos y de los que ordenan las licitaciones y definen las opciones tecnológicas y las alianzas con los agentes privados.
3. A distintos niveles, ciertas zonas de cruce entre intereses públicos y privados deben ser miradas con atención. Mencionaré solamente dos ejemplos:
 - a) Hay que discutir la cuestión del software propietario. Si bien las máquinas que se entregan pueden “correr” con Microsoft y Linux, no aparece en el horizonte todavía una política estatal decidida y sistemática de formación para el conocimiento y uso del software libre o “no propietario”. Así las cosas, por la vieja ley de inercia, el proyecto puede correr el riesgo de funcionar como una escuela de formación de consumidores

de productos Microsoft.

b) Si los padres tendrán que pagar lo que se rompe o gasta o –según parece- a cada estudiante se le proveerá de un modem 3G para acceder a la red celular, ¿no estaremos de este modo empujando a muchas familias y escuelas hacia las redes de una empresa telefónica?

Estos son señalamientos de alguna de las cosas que –a mi juicio- hay que considerar, revisar o mejorar para alcanzar los objetivos propuestos.

Los desafíos que plantea la construcción de esta política son enormes. De la experiencia local e internacional sabemos que un programa de este tipo suele tener impactos sociales palpables y visibles a corto plazo, pero que los beneficios vinculados con el desarrollo institucional y con la enseñanza y el aprendizaje necesitan de tiempos más extensos y de muy diversos y complejos desarrollos intelectuales, técnicos y organizacionales. ¿Seremos capaces de hacerlo? Anheo que dentro de cierto tiempo podamos decir que –entre todos- hemos avanzado sustantivamente y, al hacerlo, aprendimos unas cuantas cosas a lo largo del camino.

(*) Consultor IIPE-UNESCO Buenos Aires